

Economías populares en la pandemia

Cartografía provisoria en tiempos de aislamiento y crisis global

Grupo de Trabajo CLACSO

Economía popular: mapeo teórico y práctico

Investigadorxs de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela

Santiago Azzati
Martha Bernal
Ana Julia Bustos
Víctor Miguel Castillo
Alioscia Castronovo
Cristina Cielo
Anahí Durand
Verónica Gago
Mariana García-Sojo
César Giraldo
Ana María Morales
Edith Pineda
Yenny Ramírez
Itandehui Reyes-Díaz
Gladys Tzul Tzul
Alexandre Roig
Hernán Vargas



Economías populares en la pandemia

Cartografía provisoria en tiempos
de crisis global y aislamiento

Grupo de Trabajo Clacso
Economía popular:
mapeo teórico y práctico

PH portada: Luis Herrera R.
Cooperativa Audiovisual (Ecuador)

1.

América Latina se ha vuelto en estas últimas semanas el epicentro de la pandemia global, y la situación se ha venido agravando en distintos territorios, exhibiendo las desigualdades y las violencias estructurales vinculadas a la raza, el género y la clase y entrecruzándose con gestiones diversas por parte de los gobiernos locales y nacionales, pero también en relación a las dinámicas de auto-organización, cooperación y lucha propias de cada geografía, vinculadas a ciclos de revueltas, movilizaciones y resistencias que anteceden a esta coyuntura.

La crisis que atravesamos y que hace eclosión con la pandemia es de dimensiones difíciles de asimilar. Es probable que cada semana la vida colectiva se esté reconfigurando y, al mismo tiempo, se alteren las maneras de investigar, mapear y dar cuenta de lo que acontece.

Es evidente que la pandemia no ha generado una crisis, sino que ha acelerado dinámicas de la crisis civilizatoria del capital agudizando su contradicción con la reproducción de la vida con expresiones como el incremento de los niveles de desigualdad, arrasando con las condiciones del trabajo tanto formales como informales y recrudeciendo la dependencia e invisibilización del trabajo reproductivo, en el hogar y en los territorios comunitarios.

Las medidas de aislamiento, a la vez norma general pero selectiva en los hechos en cada país, declarada obligatoria en diferentes momentos y con distintas intensidades en cada sitio, constituyen un aspecto significativo de las nuevas condiciones de la reproducción colectiva en medio de la crisis planetaria.

Esto se traduce en impactos en los modos de circulación, producción y distribución de la riqueza; la caída y el bloqueo de importantes sectores de la economía y el relanzamiento de otros; la implementación de medidas de emergencia a nivel alimentario, habitacional, sanitario, educativo y económico; el despliegue de diversos dispositivos de control poblacional con clara segmentación clasista, sexista y racializante junto a la militarización de ciertos territorios; el cierre de fronteras y la limitación de la movilidad; y nuevos modos de trabajar, de conseguir ingresos y de proveer recursos que profundizan las desigualdades y las jerarquías en espacios urbanos y rurales, nacionales y transnacionales. Este panorama se inscribe en nuestra región en particular sobre una acumulación de despojos neoliberales, de aumento de la deuda externa y doméstica, y de los efectos de largo plazo de la precariedad de los servicios públicos que caracterizan al capitalismo de hegemonía financiera sobre el Sur global.

A la vez, en este tiempo están emergiendo y visibilizándose procesos colectivos de organización, prácticas de solidaridad, redes de ayuda y de cuidado mutuo. Muchas activan

dinámicas ya existentes y otras se inventan en el día a día, tomando un papel clave frente a la pandemia. Se trata de circuitos que constituyen infraestructura popular, muchas veces con preponderancia de tramas indígenas y de redes feministas, para la reproducción cotidiana: del alimento a la limpieza, de la salud a los cuidados, etc. Son estas infraestructuras también las que disputan la caracterización de la “emergencia” y, por supuesto, las líneas de fuerza que se juegan al interior de la crisis.

Las economías populares, entendidas como formaciones económicas, sociales, políticas y culturales heterogéneas que constituyen entramados de procesos, prácticas y sentidos para lograr la reproducción de la vida en medio de contextos de alta precariedad, implican siempre una definición en pugna. Y expresan un debate que es a la vez epistemológico, conceptual, histórico y político. Hoy son ellas las que están funcionando como las principales superficies de inscripción de la crisis y, a la vez, como los espacios de respuesta a sus efectos más devastadores. Son actores de primer orden en la interlocución con las políticas gubernamentales y, al mismo tiempo, construyen infraestructuras autogestivas. Protagonizan los espacios urbanos y rurales que se hacen cargo de la alimentación y, a la vez, son las más afectadas por el bloqueo de la movilidad y la militarización. Son las primeras que han visto reducirse sus ingresos y, en simultáneo, las más dinámicas en la provisión de soluciones comunitarias.

Hoy son las economías populares las que están funcionando como las principales superficies de inscripción de la crisis y, a la vez, como los espacios de respuesta a sus efectos más devastadores.

2.

Sabemos que gran parte de la población trabajadora de nuestros países no cuentan con la posibilidad del teletrabajo o de poder sostener un salario o ingreso ante las restricciones impuestas por la crisis o, directamente, que los ingresos que se tienen no alcanzan. En el continente, los datos que la OIT señala como número de trabajadorxs informales es de 140 millones, lo cual representa el 53% de la población económicamente activa. Venimos discutiendo los problemas de esas formas de medición como de sus categorías, ya que es parte de lo que la propia noción de economía popular pone a debate. El trabajo informal se trata de una categoría adoptada por la OIT en 1972, a partir del trabajo clásico de Keith Hart. Implica toda una forma de “normalización” del trabajo no-asalariado y, sobre todo, decisiones políticas en la contabilización de las poblaciones trabajadoras del sur global.

La dinámica de la economía popular amplía la categoría netamente económica de trabajadores informales para incluir a quienes sostienen sus vidas en contextos de alta precariedad

y que no necesariamente entran en el parámetro de trabajo informal: de la intermitencia laboral al desempleo, del trabajo autónomo de calle a las trabajadoras de hogar, de lxs campesinxs a pequeños emprendedores y de quienes se desempeñan como trabajadorxs a destajo en mercados laborales flexibilizados a feriantes y repartidores de plataformas.

Además, identificamos en la economía popular las capacidades políticas de las diversas prácticas y colectivos para reivindicar la productividad de sus labores, el reclamo de su inscripción en derechos y las formas de auto-organización que históricamente las han nutrido: desde las iniciativas comunitarias a las gremiales, desde las prácticas de autogestión a las invenciones cooperativas. Sabemos que estas tramas proletarias, feminizadas, migrantes, deben lidiar, usufructuar y al mismo tiempo confrontar con el neoliberalismo, y sus formas estructurales de explotación y despojo.

En el presente momento crítico, tal perspectiva analítica nos puede ayudar a comprender mejor la interdependencia entre actividades diversas para el sostenimiento de la vida, las dinámicas laborales y financieras, los territorios que las constituyen, sus ensamblajes con la economía global y las conflictividades que ponen en juego.

En ellas se despliegan relaciones de interdependencia, de reciprocidad y de competencia, de cooperación y de apuestas políticas. Las economías populares constituyen hoy una espacialidad de intersección de economías físicas, afectivas, identitarias, productivas y colectivas y, por lo tanto, de producción política; a la vez que se inscriben en procesos de temporalidades largas y de varias capas de memorias organizativas.

3.

Entonces, ¿qué significa relevar en América Latina la situación de las economías populares en tiempos de aislamiento obligatorio cuando ese aislamiento no significa lo mismo para todos? ¿Cuáles son las estrategias apropiadas para dar cuenta de las diferentes políticas que se están poniendo en práctica en la región? Nos parece importante relevar una mirada no solo desde las políticas de Estado, sino también desde los distintos ámbitos de gobernanza: los organismos multilaterales, las cámaras y federaciones patronales, las corporaciones transnacionales. Y también en las políticas de lxs de abajo, organizaciones, redes, movimientos, centros académicos y plataformas.

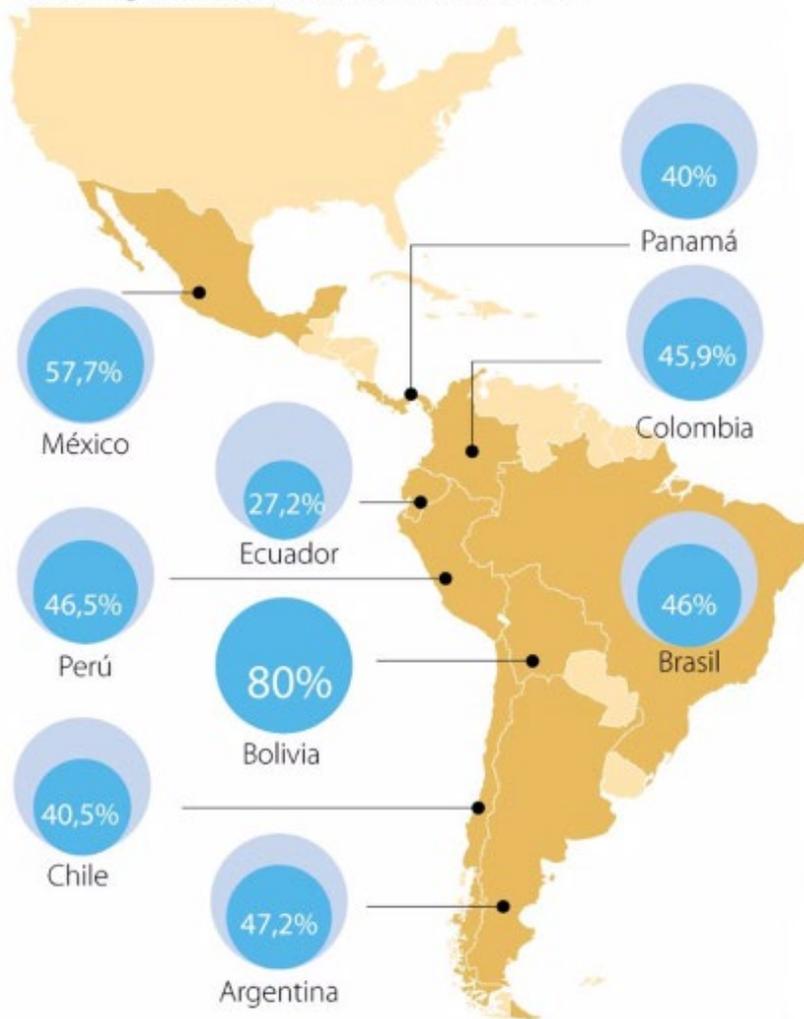
Creemos que de la comparación y el cruce de las situaciones surgen perspectivas regionales muy importantes. Por un lado, porque si bien analizamos en relación a los países, apostamos a trascender el nacionalismo metodológico que organiza en general los análisis.

Nos interesa poner de relieve distintas escalas geográficas, las temporalidades diversas y sus procesos políticos y, a la vez, esa perspectiva nos permite entender más a fondo cómo se estructuran también las políticas gubernamentales a nivel nacional.

Persistir en cartografías provisionarias en tiempos de crisis global y relevar las tensiones, disputas y estrategias que se vienen tejiendo desde los territorios, desde los distintos sectores productivos y desde los movimientos es un punto desde el cual comenzar a retomar la tarea. Los textos que siguen proponen un mapeo dinámico a nivel regional teniendo en cuenta las grandes diversidades y heterogeneidades de los lugares en los que vivimos e investigamos.

TASA DE INFORMALIDAD EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS

*Datos según el Fondo Monetario Internacional

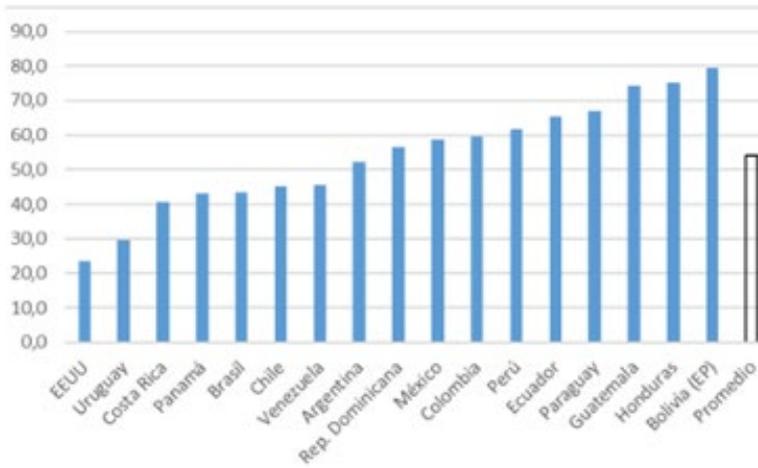


Fuente: FMI, Bloomberg / Gráfico: LR-JG

El FMI hace las mediciones considerando la “tasa de informalidad”. El trabajo informal se trata de una categoría adoptada por la OIT en 1972, a partir del trabajo clásico de Keith Hart. Como sabemos, implica toda una forma de “normalización” del trabajo no-asalariado y, sobre todo, decisiones políticas en la contabilización de las poblaciones trabajadoras del sur global.

Gráfico 2. Ranking ordenado de acuerdo al tamaño del ejército informal de reserva en Latinoamérica y EEUU ■

Desempleados más trabajadores en situación de informalidad en porcentajes de la PEA, países seleccionados



Fuente: elaboración propia a partir de OIT, INEC, correspondiente al último dato disponible.

celag.org

La categoría “ejército informal de reserva” traza una analogía con la categoría de ejército industrial de reserva, propuesta por el movimiento obrero inglés y retomada por F. Engels y K. Marx. En el siglo XX se incorpora como manera de medir la desocupación. Su traslado a la informalidad, además de volver a recurrir a la metáfora de la guerra, asimila informalidad e inactividad e informalidad y desempleo.

Preguntas de trabajo e investigación

Nos propusimos trabajar en torno a una serie de ejes/preguntas disparadoras para leer la situación regional de las economías populares en la crisis. Queremos compartirlas porque también sintetizan líneas de investigación de nuestro grupo de trabajo.

1. Estado, políticas públicas y otras escalas de intervención gubernamental
2. Autoorganización, infraestructuras populares y territorios
3. Espacio doméstico, cuidados y violencias
4. Circuitos productivos: trabajo, deudas y finanzas
5. Articulaciones entre neoliberalismo y fascismo y otros futuros

Estado y Políticas Públicas y otras escalas de intervención gubernamental

- Mapear qué tipos de medidas han tomado los Estados y qué tipos de políticas públicas están implementando los diferentes gobiernos frente a la pandemia; si están estableciendo o no formas de cuarentena; cuáles medidas vinculadas a políticas sociales y de apoyo fiscal, económico y sanitario a los trabajadores de las economías populares se están implementando en los distintos países.
- Analizar continuidades y discontinuidades en las políticas de ajuste y de austeridad en la pandemia, y las características de las políticas de gastos sociales implementadas en los distintos contextos de “suspensión emergencial de la austeridad”.
- Analizar las disputas en torno al gasto público y a la redistribución de la riqueza que se abren en el marco de las políticas públicas durante la pandemia.
- Mapear las tensiones y los conflictos que se generan en los territorios y en los circuitos de las economías populares en tiempos de bloqueo de la circulación y de la producción.
- Preguntarnos en qué modo las distintas formas de las políticas de austeridad, del extractivismo y de la acumulación se reconfiguran y cuáles prácticas y luchas ponen en tensión estas reconfiguraciones.
- Analizar las (eventuales) formas de la transferencia de ingresos y subsidios. Relevar destinatarios, dificultades para el acceso y el cobro de las asignaciones, etc. Desfasaje entre los anuncios e impacto de las políticas y asignaciones de ingresos. Eficacia o no de estas medidas frente a la crisis del trabajo y de la reproducción social.
- En el marco de la crisis parece haber una vuelta a los lenguajes de la “informalidad” para nombrar a las economías populares. ¿Qué tensiones surgen en torno a la “banca- rización universal”? La pregunta y la reivindicación por la “renta básica universal” en distintos países en la época de cuarentena.

Autoorganización, infraestructuras populares y territorios

- ¿Cuáles son los modos que las organizaciones y movimientos están encontrando para garantizar la reproducción de la vida enfrentando esta crisis y el aislamiento? ¿Qué espacio tienen las políticas de la autogestión y la autoorganización? ¿Qué prácticas y estrategias desde lo comunitario y lo comunal frente a esta crisis?
- Mapear las estrategias de las organizaciones indígenas para protegerse y cuidarse, controlar los territorios, enfrentar esta situación; registrar las tensiones, las fricciones y las formas de imbricación eventual entre políticas estatales y estrategias indígenas y campesinas en distintos territorios.
- ¿Qué sistemas de “bienestares desde y para lo común” se ponen en juego en los territorios? Inteligencia social y estrategias de reproducción social frente a la pandemia: ¿qué alcance, fuerza, límites y potencia transformadora tiene la “institucionalidad” popular, autogestiva, autónoma? Estas estrategias que operan sobre un desmantelamiento de lo público y de los servicios, ¿cómo se articulan en los territorios?
- ¿Qué tipos de infraestructuras se generan, crean y reinventan y qué tipo de recursos, bienes y derechos se producen y se reivindican desde las tramas autogestivas y comunitarias en los barrios? ¿Qué reivindicaciones emergen? ¿Qué tipo de contribuciones al bienestar social colectivo, a la salud y a la reproducción de la vida en condiciones dignas se produce desde las economías populares?

Espacio doméstico, cuidados y violencias

- ¿Cómo se sostienen las medidas de encierro desde los diferentes territorios?
- ¿Cómo se organiza el trabajo en y desde la casa? ¿Cómo el trabajo doméstico desborda el espacio doméstico y se visibiliza como trabajo esencial en la pandemia?
- ¿Cómo se enfrentan los abusos, las violencias y las violaciones de derechos humanos cometidos por parte de la policía y las fuerzas militares? ¿Cómo se enfrenta la violencia patriarcal en estas condiciones de encierro, si las casas son lugares en que estalla la violencia machista? ¿Cuáles medidas, formas de lucha, denuncia y organización son posibles en estas condiciones?

- ¿Qué experimentaciones prácticas de cuidado y autocuidado surgen en la pandemia? ¿Cómo se piensa, reivindica y elabora (el derecho a) la salud como un bien común? ¿Qué significa cuidarse colectivamente, más allá de las medidas impulsadas desde los gobiernos, en condiciones de aislamiento social? ¿Qué prácticas de solidaridad acompañan estos procesos redefiniendo relaciones, espacios, mandatos de género y jerarquías de clase y raza?

Circuitos productivos: trabajo, deudas y finanzas

- Si uno de nuestros ejes en el GT de Economías Populares ha sido reivindicar la capacidad productiva de estos sectores, constituidos como verdaderas tramas laboriosas en territorios múltiples, y discutir con las perspectivas que desconocen su productividad y su agencia política, nos interesa también discutir más allá de las políticas sociales “de emergencia” (individualizadas por lo general) como “propuestas” para contener los efectos que tendrá la crisis en estos sectores. Para esto resulta clave plantearnos el debate sobre las políticas económicas macro en relación a las economías populares y sus capacidades en términos de horizontes alternativos y estratégicos.
- En décadas, hemos visto que a pesar de todo (de las crisis, del capital (financiero), a veces del Estado también) los circuitos económicos populares (de producción, distribución y consumo de bienes y servicios) se han mantenido y han garantizado la reproducción social, dando además una disputa por el producto social (es decir, por qué se produce y cómo se produce), pero también por los modos de distribución y consumo. En este sentido, ¿qué alternativas pueden pensarse para evitar que durante esta crisis se corte por completo este flujo de producción, distribución y consumo de bienes y servicios esenciales que es garantizado por el trabajo en los territorios? O, de otro modo, ¿podría ser el momento propicio para reivindicar estas formas económicas como alternativa a la crisis? ¿Qué impactos tiene el bloqueo de la economía sobre los circuitos de producción, comercialización y migración en las economías populares?
- Relevar el incremento de deudas (estatales y domésticas), mecanismos de despojo y aceleración extractiva.

Articulación entre neoliberalismo y fascismo y otros futuros

- ¿Cómo se reconfiguran en la actual crisis los modos de acumulación de capital, de explotación del trabajo y del mando sobre las vidas? ¿Estamos frente a una nueva crisis del neoliberalismo? ¿Hay una rearticulación y profundización en la inestabilidad de esta crisis entre el neoliberalismo y las dinámicas reaccionarias, conservadoras y fascistas que en los últimos años se han consolidado como modos de garantizar al capital el control y el disciplinamiento social?
- Cierre de fronteras: ¿cuáles son los modos de reorganización de la movilidad, y las restricciones de derechos para migrantes regulares e irregulares?
- Transformaciones del trabajo: ¿qué impacto tienen las cuestiones vinculadas al teletrabajo, a las economías de las plataformas, sobre el trabajo de quienes están en primera línea frente a la pandemia? ¿Cómo se están organizando ahora sus efectos a futuro?
- ¿Qué futuros posibles se despliegan y se vislumbran en estas condiciones que vivimos desde las perspectivas, experiencias y estrategias del mundo de las economías populares, del cuidado, de la reproducción de la vida, de la transformación social?

ECUADOR

Por Cristina Cielo y Ana María Morales

Ecuador cerró el mes de mayo con movilizaciones en más o menos 20 ciudades del país. En pleno contexto de pandemia, crisis sanitaria y económica, el gobierno de Lenin Moreno está profundizando las políticas neoliberales que atacan al sistema de salud, a la educación pública y ya han provocado miles de despidos. Así no solo se profundiza y recrudece la crisis económica y social que ya se estaba gestando, sino que el gobierno aprovecha para realizar los ajustes estructurales al que el pueblo ecuatoriano se había resistido con las movilizaciones insurgentes en octubre del año pasado.

En 2019, con una economía debilitado por su dependencia en el petróleo –que ya había bajado de su pico de USD \$108,20 en 2013 a USD \$49,60 en 2019– y una deuda pública que creció del 16,8% del PIB en 2011 a 53,4% en este año, la respuesta del gobierno de Lenin Moreno en 2019 fue recurrir al FMI. Los peores estragos de la reestructuración que implica tal pacto se han impugnado en movilizaciones y protestas. Pero apenas el Ecuador iniciaba la cuarentena, el gobierno de Lenin Moreno decide pagar puntualmente al FMI la deuda externa. Así, la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Ayuda Humanitaria que legaliza la precarización y flexibilización laboral y desprende a los empleadorxs de sus obligaciones con lxs trabajadorxs, posibilitando que se reemplace la protección del Código del Trabajo por cuatro años con pactos privados sobre condiciones laborales entre partes desiguales y pasando los costos de la crisis a los trabajadores. También se aprueba la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, efectivamente aprobando los acuerdos con el FMI que fueron vetados tras las movilizaciones del octubre pasado.

Las organizaciones sociales y sindicales que habían logrado refrendar las decisiones del gobierno se han quedado con sus capacidades limitadas, el Estado ha dado la espalda al diálogo social. Una de las medidas tomadas por el Estado ecuatoriano fue la declaratoria de toque de queda a partir de las 14 hs. en todo el país, sin considerar que existían cantones con un número muy bajo de contagios. Además, deja sin ninguna respuesta a una parte grande de la población que trabaja en el subempleo y la informalidad. Profundizando las vulnerabilidades del mismo coronavirus, las políticas implementadas desde la cuarentena han agudizado las desigualdades y las múltiples precariedades que viven lxs más vulnerables, en un contexto en el que la mayoría de la población ya se encontraba sin ingresos del salario mínimo o beneficios y protecciones laborales.

Si bien las restricciones de bioseguridad están cambiando en algunas ciudades bajo la modalidad de “semáforos” que permitirá una mayor movilidad de la población, el Estado ha autorizado mediante un acuerdo ministerial la participación de militares para realizar controles en las ciudades, atender a las movilizaciones y utilizar armas de fuego. Poca otra coordinación además de las imposiciones y controles ha hecho el Estado, demostrando una falta de liderazgo a nivel nacional que se refleja en las disparidades de impacto de la pandemia en los diferentes lugares.

El paulatino desabastecimiento del Estado explica las desigualdades no solo económicas sino también territoriales, y en ellas los contagios y las muertes por covid-19. Guayaquil –la ciudad con más subempleo en el país– vivió el peor escenario con miles de contagios, un sistema de salud colapsado y un Estado ausente que provocó que familias no tuvieran entierros dignos para sus seres queridos. Por un lado, el Estado ha fortalecido sus políticas de control social, y por otro no muestra una política efectiva que garantice el acceso a la salud, la protección y atención de la población ante la pandemia. Médicxs y enfermeras continúan denunciando las condiciones de los centros médicos y la falta de insumos de bio protección. Si bien los municipios, prefecturas y el gobierno central reparten canastas de alimentos, existen quejas por entregas que resultan indignas, que exigen fotografías de panoramas y vidas precarizadas.

Trabajadorxs informales en las ciudades han hecho grandes esfuerzos para volver a sus lugares de procedencia, donde por lo menos tienen redes y, en el campo, pueden sembrar. Migrantxs de países cercanos –particularmente de Venezuela cuya migración había aumentado fuertemente en los años pasados– quienes habían estado buscándose la vida en las ciudades ecuatorianas también han buscado volver a sus tierras. Por la cesación de transporte público, se han visto forzados a caminar largas distancias además de enfrentarse con la xenofobia incrementada en este momento de aislamiento y miedo. Comunidades y parroquias rurales también se han visto con la necesidad de velar por sí mismas y cerrarse frente al miedo del contagio. A la misma vez, para la mayoría de pequeñxs productorxs, llevar sus productos agrícolas a las ciudades se ha vuelto cada vez más difícil. Con los mercados cerrados y la circulación fuertemente limitada, las desigualdades también se han incrementado entre diversos productorxs, beneficiando sobre todo a los más grandes con vínculos establecidos con clientes como las tiendas y supermercados.

Con los mercados cerrados y la circulación fuertemente limitada, las desigualdades también se han incrementado entre diversos productorxs, beneficiando sobre todo a los más grandes con vínculos establecidos con clientes como las tiendas y supermercados.

Ante este panorama de desabastecimiento y precarización, diversos tejidos sociales se fortalecen para atender la salud y el bienestar de las poblaciones. Inicialmente la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y más movimientos sociales demandaron una red de abastecimiento de alimentos que no favorezca a las grandes cadenas de supermercados, facilite la soberanía alimentaria y retribuya dignamente a lxs campesinxs; sin embargo, esta demanda no fue tomada en cuenta. Movimientos campesinos como la FECAOL (Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral) se encuentran realizando trueques de alimentos en diferentes regiones del país y desde el inicio de la crisis sanitaria actuaron contra los sobrepuestos ingresando alimentos en la ciudad de Guayaquil.

Las redes feministas atienden en todo el país los diversos casos de violencia de género, el terror y el duelo por las muertes por covid-19. A la par existen redes de contención, organizaciones de mujeres, comunitarias y barriales que buscan sustentar la alimentación de todxs ante una profunda incertidumbre y la expansión del desempleo. Para empezar a rastrear las iniciativas autónomas y autogestionadas de redes de apoyo solidario a personas y familias afectadas covid-19 en el contexto de desigualdades agudizadas, el Colectivo de Geografía Crítica de Ecuador, junto con la Fundación Rosa Luxemburgo, señala:

Compartimos este mapa cuyo objetivo es apoyar a la difusión de estas iniciativas. Esperamos que más experiencias se sumen y que se multiplique la entrega de apoyo y donaciones; por ello, esta cartografía será actualizada y difundida por nuestras redes sociales semanalmente.

El mapa está en el siguiente enlace: <http://u.osmfr.org/m/457691/>.



Beneficiarias esperan bono social en Ecuador. PH: Cortesía MIES.



Fila para retirar vianda de comida en una olla popular en Argentina. PH: Gastón Bejas.

COLOMBIA

Por Yenny Ramírez, César Giraldo y Martha Bernal

En Colombia, los efectos de la emergencia por el covid-19 revelan principalmente tres problemáticas: primero, la enorme desigualdad socioeconómica que existe en Colombia; segundo, las graves deficiencias que tiene el sistema de seguridad social y, particularmente, el sistema de salud; y finalmente, las dificultades que enfrenta el país para garantizar la soberanía alimentaria. Un elemento en común que comparten estas tres problemáticas es que no fueron generadas por la actual crisis sanitaria, por el contrario, son problemáticas estructurales, que en los últimos años se han agudizado con los procesos de financiarización y las políticas de corte neoliberal que hoy se manifiestan con mayor crudeza en los sectores de las economías populares.

A nivel mundial, la mayoría de gobiernos implementaron la cuarentena como medida para frenar los contagios. En Colombia, la cuarentena arrancó el 25 de marzo, además de retardar el ritmo de contagios, se supone que con esta medida el gobierno ganaría tiempo para destinar recursos públicos al sistema de salud y, de este modo, prepararlo para enfrentar la crisis sanitaria. En lo posible, se trataría de evitar las situaciones dramáticas que vivieron en Italia, España, EEUU o, sin ir más lejos, Ecuador.

Sin embargo, en un país tan desigual como Colombia, decretar la cuarentena, es decir, el confinamiento de las poblaciones en sus casas, reveló las enormes brechas y desigualdades en términos de derechos, ingresos y condiciones laborales a la que está sometida la mayor parte de la población trabajadora. Recién decretada la cuarentena, para muchas familias la gran preocupación fue cómo sobrevivir “quedándose en casa” cuando la única opción que tienen para llevar ingresos diarios a sus hogares es ir a la calle a trabajar. No trabajar, significa no tener ingresos y, por ende, no comer. Pero esta no es una preocupación de unas cuantas familias, en Colombia estamos hablando de las dos terceras partes de la población trabajadora que su sustento depende de las economías populares.

Transcurridos los primeros días de la cuarentena y ante la falta de respuesta inmediata de los gobiernos, en muchas ciudades el inconformismo creció, se vieron protestas en las calles de los barrios y, en algunos casos, como medida desesperada, algunos trabajadores de las ventas ambulantes llegaron a hacer plantones en las sedes de las autoridades locales. La cuestión era de hambre, por eso, no sólo se escucharon durante días los cacerolazos en los barrios pidiendo ayudas concretas, sino que se empezaron a ver trapos rojos colgados

en las fachadas de las viviendas, como un símbolo de pedido de auxilio de las familias que se habían quedado sin sustento diario y sin comida para enfrentar el confinamiento.

Otro elemento que esta crisis puso al descubierto fue la precariedad del sistema de seguridad social, en lo que tiene que ver con salud y pensiones. Por una parte, el sistema de salud en Colombia cuenta con dos regímenes, el contributivo para quienes tienen capacidad de pago y el subsidiado para la población pobre que accede a los servicios de salud a través de un proceso burocrático de focalización. Ambos regímenes se basan en el aseguramiento, cuyo esquema no sólo ha llevado a la ruina a los hospitales públicos, sino que ha precarizado las condiciones laborales del personal de la salud, porque es un modelo que termina priorizando las ganancias de la intermediación de las empresas aseguradoras. Bajo estas condiciones, ante una crisis sanitaria como la actual, es preocupante un sistema de salud que carece de esquemas preventivos y en el que la mayor parte de la población trabajadora (de las economías populares) está afiliada al régimen subsidiado, donde la atención es precaria, por el deterioro y desfinanciamiento que han sufrido los hospitales públicos.

Por último, aunque uno de los trabajos considerado esencial en el marco de esta pandemia ha sido la producción de alimentos, el confinamiento ha provocado el dislocamiento de las cadenas de producción, suministro y comercialización de este sector. Para el caso colombiano, es importante señalar que el abastecimiento de los alimentos que se consumen proviene en gran parte de producción campesina; sin embargo, las consecuencias de la pandemia sobre esta producción pueden ser lamentables.

No se puede desconocer que la producción campesina ya venía debilitada de tiempo atrás: trabajando en condiciones de precariedad, con serias dificultades para garantizar la cadena de producción y comercialización, compitiendo con los precios de los alimentos importados, sin apoyo ni financiamiento del gobierno y enfrentando la violencia en los territorios. Justamente, las grandes movilizaciones y protestas de campesinos e indígenas que tuvieron lugar en los años 2013 y 2016, exigían mejores condiciones para su sector, lamentablemente hasta el día de hoy, el gobierno no ha cumplido lo pactado. Por eso, las medidas de confinamiento, que claramente no han protegido a este sector, pueden debilitar aún más la cadena de producción y de comercialización entre el campo y la ciudad y entre las producciones campesinas y las economías populares, (que en muchos casos dependen de la comercialización de los productos agrícolas) y llegar a convertirse en una gran amenaza para la soberanía alimentaria.

El balance después de más de dos meses de cuarentena es que las medidas implementadas por el gobierno nacional han sido insuficientes, no se fortaleció el sistema hospitalario y no han sido suficientes los giros adicionales a los diferentes programas sociales que realizan

transferencias monetarias a las poblaciones vulnerables para garantizar que la población trabajadora de las economías populares se pueda quedar en casa. Aunque vale la pena destacar, por un lado, las disposiciones de algunas autoridades locales (de municipios o gobernaciones) que han tomado medidas para fortalecer las producciones y economías propias y ponerles en función de sus poblaciones y, por el otro, las iniciativas de algunas comunidades indígenas en los territorios.

Hoy, la crisis sanitaria y sus efectos en los sectores de las economías populares les estalló en las narices a los gobiernos. Trabajadorxs que históricamente han sido invisibilizadxs y las veces que se les ha considerado es para estigmatizarlxs como pobres o para reprimirlxs porque son una amenaza para el espacio público. Nunca han sido valorizados sus trabajos y sus economías, a pesar de que en las peores condiciones hayan garantizado la reproducción social de millones de personas. Por eso, hasta que no se les tome en serio, las medidas seguirán siendo pañitos de agua tibia.

Algunas voces optimistas pronostican que esta crisis traerá profundos cambios en la sociedad. Sin embargo, para Colombia, con un gobierno autoritario como el actual, el escenario que se vislumbra no es alentador, todo parece indicar que se agudizarán las condiciones precarias en las economías populares y muchos de los nuevos desempleados no tendrán otra opción que encontrar su sustento en estas economías. Por otra parte, los ganadores parece que siguen siendo las finanzas y los bancos, quienes han aprovechado las crisis para ampliar su red de endeudamiento y, con la connivencia del gobierno, han sido beneficiados como ningún otro sector con transferencias de recursos públicos para supuestamente “dinamizar” la economía.

Los ganadores parece que siguen siendo las finanzas y los bancos, quienes han aprovechado las crisis para ampliar su red de endeudamiento y, con la connivencia del gobierno, han sido beneficiados como ningún otro sector con transferencias de recursos públicos para supuestamente “dinamizar” la economía.



Vendedores ambulantes se “reconvierten” a desinfectadores callejeros en Bogotá (Colombia).
PH: Mauricio Moreno / EL TIEMPO.



Criminalización de la venta ambulante en Lima (Perú). PH: Compartida por Asoc. de Comerciantes y Trabajadores del Mercado N1 La Parada.

VENEZUELA

Por Mariana García-Sojo, Edith Pineda y Hernán Vargas

Situación general pandemia como catalizador de la crisis múltiple venezolana

Se asumió una estrategia de gobierno de cuarentena total para aplanar la curva de contagio y luego ir alternando periodos de flexibilización con vuelta a cuarentena total, esto generó un saldo de solo 200 casos y 9 muertos durante los primeros dos meses. Sin embargo, los casos han ido aumentando en los últimos días considerablemente según declaraciones oficiales sobre todo por los cientos de miles de venezolanxs que regresan al país desde distintas partes de la región con altos niveles de circulación del virus. A la situación del covid-19 se suma en Venezuela el bloqueo; en el año 2013 entraban al país 42 mil millones de dólares y a finales de 2019 solo 4 mil millones de dólares, eso es indicador de la situación económica nacional; estas cifras son el resultado de una crisis múltiple que venimos enunciando como la conjunción entre la crisis civilizatoria del capital, la crisis de la hegemonía imperialista de EEUU (que ha generado una política de asedio contra Venezuela pronunciada en los últimos siete años) y la crisis del modelo rentista petrolero venezolano. Esas eran cifras del año pasado así que estamos seguros que la crisis del covid-19 debe agravar estos efectos y exacerba las consecuentes contradicciones internas.

Acciones desde el Estado

En general la acción estatal se ha desplegado para contener el covid-19, teniendo en cuenta las grandes debilidades nacionales (que a pesar de un par de décadas de inversión en lo público pero que han sido seriamente reducidas por el peso de la crisis múltiple) para atender una escalada exponencial pandémica. Se han desarrollado medidas como cuarentena social y colectiva en todo el país, se ha desarrollado un esquema de atención en las fronteras terrestres (puestos de atención social integral PASI integrados por personal médico, organizaciones populares y fuerza militar) e incluso activado vuelos aéreos para venezolanxs que retornan. Cobertura de salarios al sector público y privado, bonos especiales para economía informal y sostenimiento de bonos ordinarios para madres solas y familias más vulnerables, congelación de créditos, alquileres, impuestos, cero desalojos, entre otras medidas de protección a la población. Estas últimas medidas, aunque importantes se hacen insuficientes frente a una situación económica de dolarización, especulación e inflación que hace muy precario el equilibrio social; el salario está muy por debajo de la canasta alimentaria, aun cuando se han acordado los precios de ciertos productos con diversos actores de la cadena

de suministro alimentario. Lo que deja a muchas familias al margen del consumo básico promedio y afecta el cumplimiento de la cuarentena debido a la necesidad de trabajar en el contexto que sea y ese es otro factor que favorece la flexibilización de los controles y la propagación del virus.

Acciones autónomas desde el pueblo organizado

Luego, por otro lado tenemos un conjunto de respuestas populares organizadas autónomas que apuntan a fortalecer las necesidades materiales para la reproducción de la vida, centrándose en la alimentación: redes de pequeños productores, redes de asociaciones cooperativas y comunas rurales que articulan con territorios urbanos para desarrollar mercados populares, ferias, ventas planificadas y colectivas junto con cooperativas de consumo y comunas, donde las mujeres son la sujeta central y mayoritaria de estas organizaciones. A las cuales se suman otras iniciativas clave como las organizaciones feministas que han desarrollado líneas de atención a la violencia de género, propuesto mecanismos de seguimiento de conjunto con tecnología estatal y han presionado al Estado para atender como emergencia los femicidios y resto de casos de violencia de género. También la acción de organizaciones y movimientos para atender la enorme masa de migrantes venezolanos que regresan al país desalojados por la crisis pandémica y su consecuente aceleración de las políticas neoliberales.

Una crisis múltiple que venimos enunciando como la conjunción entre la crisis civilizatoria del capital, la crisis de la hegemonía imperialista de EEUU (que ha generado una política de asedio contra Venezuela pronunciada en los últimos siete años) y la crisis del modelo rentista petrolero venezolano.

Acciones conjuntas entre pueblo organizado y gobierno

Luego tenemos la acción conjunta entre organización comunitaria –en sus diversas expresiones– y el Estado coordinado en sus distintos niveles de gobierno, con expresiones como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción que proveen alimentos subsidiados de manera directa a un estimado de 6 millones de familias (en cantidades y frecuencias muy variables) y, por otro lado, los planes de atención al covid-19 que han permitido la detección y atención de casos comunitarios así como la administración de más de 1.200.000 pruebas de despistaje (hasta finales de junio).

Dificultades para las economías populares

En el contexto específico de las economías populares hay al menos dos dificultades que se han hecho muy visibles: (i) la dificultad para el acceso a la gasolina necesaria para producción y distribución de alimentos, esto como resultado de factores de la crisis múltiple que han devenido en una escasez anclada a la dolarización del precio vía mafias de reventa; (ii) la disminución de la capacidad de consumo en las comunidades urbanas representa un problema para los productores rurales que luchan por mantener los niveles de producción, esta situación obliga a ampliar las redes de consumo organizado en territorios urbanos.

Disputa estructural en medio de la crisis múltiple

Si nos tocara resumir un panorama complejo y con muchas aristas por caracterizar diríamos que en Venezuela el covid-19 ha acelerado la crisis múltiple de los últimos años y eso se traduce en escenarios de disputa interno, para nosotras el más significativo es la confrontación entre racionalidades políticas sobre cómo afrontar la crisis: racionalidad de estado protector, racionalidad neoliberal o racionalidad comunitaria. En nuestra opinión las dos primeras forman parte de la crisis sistémica, lo cual no implica que sean inmediatamente sustituibles, por lo tanto deben balancearse con las lógicas comunitarias que vienen constituyéndose en fuerzas concretas que han permitido que buena parte de la población resolvamos la vida, al tiempo que estructuran alternativas metabólicas materialmente efectivas, democráticamente legítimas e institucionalmente factibles.

Forjar lecturas comunes en la región

Nos parece que esta confrontación que hemos descrito, a pesar de las particularidades del contexto venezolano, no está aislada de los escenarios de disputa de las economías populares en la región, por ello nos parece clave construir una ruta de trabajo entre organizaciones e investigadorxs de las economías populares que nos permita desarrollar claves y códigos comunes para construir desde abajo miradas y perspectivas sobre cómo actuar en este nuevo escenario del orden civilizatorio del capital, cuya crisis pareciera estar siendo acelerada por la pandemia del covid-19, amenazando más que nunca la vida en todas sus formas.



Esperando transporte en Lima (Perú) para el retorno a los pueblos de origen. PH: Angela Ponce.



Regreso de venezolanxs desde Colombia, a través de la frontera de Paéz (Venezuela).
Gentileza #EnFotos.CRBZ

MÉXICO

Por Itandehui Reyes-Díaz

En México vivimos un ciclo progresista, tardío en relación con otros países del continente. En la actual pandemia, el Estado mexicano ha implementado una estrategia de comunicación para gestionar la información relacionada con el avance del covid-19 en el territorio. Desde el principio, la crisis se mantuvo con esta estrategia, mostrando datos sobre el número de defunciones, contagios y zonas geográficas, a la que se sumó la amplia difusión de programas sociales ya existentes, así como ampliar los préstamos como medida económica emergente.

Estado y Políticas Públicas

Se anunciaron subsidios para lxs trabajadores de economía informal que representan el 60% de la población ocupada. Los subsidios son préstamos de 250 dólares mensuales que se tramitan por internet, con la condición trabajar como voluntario si la contingencia es mayor, como un ejército de reserva. A nivel federal, se implementó el programa de apoyo a las PyMES, Crédito a la palabra, se trata de préstamos de 1,100 dólares (a 6% anual y el pago a 48 meses) con el objetivo de que las Pymes continúen produciendo. En marzo se adelantó un mes las pensiones, es decir se depositaron los meses correspondientes a abril y marzo para amortiguar el consumo.

La estrategia gubernamental a mediano plazo anunciada para hacer frente a la crisis económica evidenciada con la covid-19 coloca en el centro a los Megaproyectos de infraestructura (Nuevo Aeropuerto, Tren Maya) como punta de lanza del crecimiento económico. La minería, la fabricación de automóviles y la construcción fueron clasificadas como actividades esenciales para priorizar su reanudación.

Autoorganización, infraestructuras populares y territorios

Las redes ya existentes se organizan en nodos de distribución local, como un modelo cooperativo, expandido a diversas actividades tanto de producción de comida y artesanía como talleres culturales realizados en línea. En las comunidades campesinas, en el sur del país, a modo de autodefensa, se cerró el acceso a gente foránea, impidiendo el paso a la distribución de refrescos, cerveza y algunos productos procesados. Las comunidades zapatistas como territorios gestionados autónomamente desde mediados de marzo anunciaron el cierre de

los caracoles a causa de la pandemia. Un número considerable de proyectos de huertos y agricultura urbana se reactivaron. Existe una permanente tensión entre las prácticas autogestivas que van surgiendo en los niveles locales y la intervención estatal que rápidamente las traduce en programas subsidiados con sus propias reglas y agendas.

Espacio doméstico, cuidados y violencias

Como en todo el globo, se registra una sobrecarga de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres: tareas domésticas, *home-office* y enseñanza. Por fortuna se ha echado mano del despliegue de una amplia red de contención emocional y circulación de saberes de medicina tradicional por parte de compañeras organizadas en redes feministas. Diversas organizaciones civiles han registrado el aumento de la violencia doméstica en contra de las mujeres y niñas, dado que las llamadas al 911 han aumentado un 25%. Mientras que el ejecutivo declaró que durante el confinamiento había “fraternidad familiar” y que el 90% de las llamadas de auxilio no son reales. Mientras que el número de feminicidios en el primer trimestre del año es superior (720) en un 15%, respecto al año 2019 (650), así mismo las víctimas infantiles aumentaron el 24%. Constelaciones de colectivas feministas han hecho frente al discurso oficial con campañas virtuales para visibilizar el aumento de la violencia en contexto de confinamiento.

Deudas y finanzas

Cabe decir que todos los apoyos que ha anunciado el estado son en forma de crédito y con un interés del 6%. A su vez el teletrabajo, la entrega por mensajería (*delivery*), y la incentiación de la economía de plataforma ha incrementado la explotación y la precariedad que de por sí azotan estos circuitos de distribución de mercancía y servicios.

Se ha echado mano del despliegue de una amplia red de contención emocional y circulación de saberes de medicina tradicional por parte de compañeras organizadas en redes feministas.

Neoliberalismo

A pesar de que en el relato el progresismo sostenga un combate contra el neoliberalismo. Los análisis apuntan a recortes en el gasto público, principalmente en áreas de educación. Hay un discurso de combate a la corrupción y privilegios de la oligarquía que justifica el ajuste. Mientras tanto las elites que se beneficiarán de los megaproyectos han negociado sus privilegios, ahora se han puesto al corriente del pago de impuestos retrasados para aumentar la recaudación fiscal.



El 56% de la población trabajadora se sostiene de la economía informal en México, el confinamiento y la campaña #QuedateEnCasa no es una opción para gran parte de la población. PH: Andalusia Knoll Soloff



La economía popular se las rebusca para continuar en México. PH Brian Torres e Irving Cabrera.

PERÚ

Por Anahí Durand y Víctor Miguel Castillo

Este breve informe sobre la situación del Perú durante la pandemia, sin dejar de reconocer sus implicancias mutuas, será desarrollado en cinco partes: la crisis previa de institucionalidad política, la mano dura militar, el salvataje financiero, la criminalización de la economía popular y el incremento de la violencia hacia los cuerpos feminizadxs.

Nuevo parlamento

Cuando en noviembre del año 2019 se conocía el primer caso de coronavirus en el mundo, en el Perú vivíamos sin parlamento. El presidente Martín Vizcarra había decretado un mes antes la disolución constitucional del congreso (dominado en ese entonces por el fujimorismo) por negarle una cuestión de confianza a dos gabinetes presidenciales. Vizcarra había iniciado una lucha anticorrupción que comprometía al fujimorismo desde que asumió la presidencia luego de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo 2018. Respaldo por el empuje de las calles que se manifestaron contra la corrupción de jueces fujimoristas, el cierre del parlamento evidenciaba la crisis de legitimidad política en el país, de larga data, y que se pretendía cerrar con nuevas elecciones en enero del presente año. Lo que las élites políticas no querían y siguen sin querer escuchar es que la crisis desconocía partidos y colores. El humor de las manifestaciones era generalizado contra la clase política, que desde hace 30 años viene maniobrando el timón neoliberal de un país que hace a los ricos más ricos y deja a lxs pobres sin opción. En la nueva composición del parlamento han aparecido nuevos partidos, pero los grupos de poder económicos siguen intactos y durante la pandemia fortalecidos.

Toque de queda

El 15 de marzo de este año el presidente Vizcarra decretó un “toque de queda” desde las 8 pm hasta las 5 am y que actualmente fue modificada de 9 pm a 4 am. Habilitó a las fuerzas armadas a circular por las calles para asegurar lo que llamó, a modo de eufemismo para no recordar las épocas de terrorismo en los años 80, el “aislamiento social obligatorio”. Quince días después el gobierno decretó la Ley N° 31.012, la cual exime de responsabilidad penal a los policías y militares que maten o hieran a la población mientras patrullan las calles para hacer cumplir el estado de emergencia. Dos lecturas respecto a esto: primero, para

la historia reciente del país, ver circular militares en las calles, impunemente, nos lleva a las peores épocas del fujimorismo, que desde principio de los años 90 cometió delitos de lesa humanidad por las que su líder, Alberto Fujimori, fue condenado. Y segundo, de cara al futuro, esta ley podría ser utilizada para la represión y criminalización del derecho a la protesta de lxs trabajadorxs. El orden y la mano dura parece ser la única garantía de control que propone el gobierno de Vizcarra.

Salvataje financiero

El 6 de abril se promulgó el Decreto Legislativo 1455, más conocido como “Reactiva Perú”, que busca evitar el quiebre de la cadena de pagos de las empresas formales. Este plan es parte del salvataje del 12% del PBI orientado al sector financiero, debido a que es la banca privada la que media y ejerce de prestamista a las empresas. Hasta el momento ya se ejecutó la mitad de los 30 mil millones de soles peruanos (casi 9 mil millones de dólares estadounidenses) que el Estado, como garante, dispuso para salvar a la pequeña y mediana empresa: entre las beneficiadas están las compañías con ingresos anuales superiores a los S/60 millones que recibieron el 36% de los créditos. Medianas y Pequeñas empresas (Pymes) alcanzaron el 51% de los préstamos, las Micro y Pequeñas empresas (Mypes) solo 11%, y los negocios que pidieron S/30 mil (poco más de 8 mil dólares estadounidenses) para sobrevivir apenas recibieron el 0,8%. En esos números se pudo conocer que la banca prestó 52 millones de soles peruanos (15 millones de dólares estadounidenses aproximadamente) a 14 empresas de alto perfil de riesgo y a 6 involucradas en los Panama Papers y al caso Lava Jato. Los rescates estatales en países como Argentina no consideraron a las empresas con antecedentes en paraísos fiscales; el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) no vio necesario añadir este requisito en el protocolo de Reactiva Perú. Hay una insistencia en el modelo neoliberal del “chorreo”, “derrame”, que en esta crisis quedó nuevamente expuesta en detrimento de los sectores populares.

Criminalización ambulante

La lucha contra el covid-19 intensificó la lucha contra la economía popular. El gobierno repartió un bono de 120 dólares en dos quincenas y sólo cubrió a 800 mil familias, cuando hay más de 7 millones de trabajadorxs *informales*. La insuficiente asistencia estatal vino acompañada de la criminalización de lxs comerciantes ambulantes. Mientras el *establishment* denunciaba un ejercicio autoritario y acusaba de dictador a Vizcarra por decretar la cuarentena, exigiendo que se vuelva al trabajo (*formal*) para no detener al país y seguir incrementando sus márgenes de ganancia, celebraba las acciones de desalojo, despojo y

persecución contra lxs trabajadorxs de la economía popular, cuya composición mayoritaria es de mujeres, con la excusa de que los mercados tradicionales son “focos infecciosos”. Este rol persecutor contra lxs ambulantes se registra en la capital desde la década de los noventa, pero cobra un nuevo tono racista y estigmatizador asociando el supuesto origen de la pandemia (hábitos alimenticios en Wuhan, China) con la insalubridad en los mercados populares. Se han hecho campañas de higienización en casi todos los mercados de la capital y en muchos casos esto estuvo acompañado del acopio de la mercadería de lxs trabajadorxs alegando que comerciaban comida ya contaminada. En medio de tal situación y de este despojo intensificado muchos ciudadanxs volvieron a sus tierras, en sus provincias, al no tener más medios para sobrevivir en ese contexto criminalista. El estado que repatriaba a compatriotas turistas no ayudó del mismo modo a los compatriotas que quisieron volver a sus ciudades *de origen*, quienes iniciaron una caravana para movilizarse de la capital hacia sus hogares en el interior a pie.

Recrudescimiento de la violencia contra lxs cuerpxs feminizadx

La estigmatización contra la economía popular estaba dirigida justamente a las mujeres que componen en gran medida este sector. Vizcarra decretó a inicios de abril que hombres y mujeres pudieran salir en diferentes días para evitar las concentraciones en los mercados y centros de acopio de alimentos. La larga tradición heteropatriarcal en nuestro país permitió que se deleguen las tareas de compras de alimentos a las mujeres, generando aglomeraciones en los mercados, siendo rápidamente estigmatizadas y culpadas por la expansión del virus. A esto se sumó la violencia contra las diversidades sexuales e identitarias: mujeres trans y travestis exigieron ser reconocidas como ellas deseaban mientras policías y militares les pedían el DNI (en el Perú no existe una ley de identidad de género). Esta medida sólo duró una semana, pero fue suficiente para medir el grado de violencia preexistente contra las mujeres y diversidades. En el mismo plano de violencia se registraron hasta las primeras semanas de mayo 12 feminicidios y 226 violaciones durante el confinamiento, 132 de ellas a menores de edad, a quienes el aislamiento dejó confinadas y desprotegidas ante sus asesinos o violadores.

La situación nos deja en estado de alerta, pero a la vez atentxs a los modos que tiene la población de resistir y de generar nuevas formas de solidaridad y redes de contención. ¿Cómo volver a activar la central de comedores populares o redes de contención

La larga tradición heteropatriarcal en nuestro país permitió que se deleguen las tareas de compras de alimentos a las mujeres, generando aglomeraciones en los mercados, siendo rápidamente estigmatizadas y culpadas por la expansión del virus.

similares, que fueron importantes en las épocas de despojo de inicio del neoliberalismo en los noventa? Las poblaciones indígenas han cerrado el ingreso a sus tierras, pero a la vez reclaman algún tipo de presencia del Estado. ¿Cuáles son las redes de solidaridad que pueden activarse luego de la pandemia? ¿Cómo evitar que en esta crisis haya un desplazamiento de la mano de obra a las economías delictivas (trata, narcotráfico, minería ilegal, etc.)? Tenemos como reto replantear nuestras categorías a partir de las luchas que ya se están llevando a cabo.

GUATEMALA

Por Gladys Tzul Tzul

Para hacer un balance sobre lo que ocurre en Guatemala en la época de la pandemia es necesario interrogarse en qué momento se encontraban varias comunidades y pueblos Indígenas en los meses de febrero de 2020. Esta pregunta es importante de realizarla, debido a la composición de la economía y la lucha por la tierra en este país donde el Estado se ha formado a partir del acaparamiento de tierras.

La alta densidad de población indígena permite analizar por lo menos *cuatro* formas de trabajo existente de mujeres y hombres indígenas. Una primera es la que establece y crea redes de comercio indígena –textiles, verduras, granos, etc.– que se combina con una economía de reproducción de pequeñas parcelas. Una segunda son las comunidades que producen economía campesina y economía de reproducción y que se organizan con redes de comercio cooperativista y venden sus productos. Una tercera es la expresión de redes de comunidades de migrantes que también producen economía de reproducción en pequeñas parcelas. Y una cuarta son las generaciones de migrantes indígenas dentro de la ciudad capital de Guatemala y algunas ciudades intermedias (Chimaltenango, Escuintla). Estas olas de migración se intensificaron en la de década de 1970, cuando se desarrolló la guerra guatemalteca. Claramente, estas cuatro dimensiones de la economía y del trabajo se entremezclan y se nuclean entre sí mismas.

Estas condiciones dan cuenta de diversas y complejas formas de generar ingresos, de crear redes de comercialización, y de crear medios concretos para la reproducción de la vida. Vale mencionar que en estas economías indígenas/comunitarias se han desarrollado por mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos, ancianas, es decir, por una trama comunal.

Dado el contexto, se puede decir que las varias comunidades se encontraban en amplio proceso de lucha contra desalojos de tierras, se encontraban realizando rondas para evitar que entraran las maquinarias de minería a sus pueblos, haciendo ceremonias del agua, comenzando a sembrar sus cultivos, oponiéndose legalmente contra los tratados que quieren hacer legal los transgénicos y expropiar las semillas, organizando sus fiestas comunales.

Es decir, las comunidades indígenas, en esos variados sistemas de gobierno donde la organización misma tiene como manera organizativa, garantizar la reproducción de la vida, desde la defensa de la calidad comunal de la tierra y todo lo que lo contiene hasta las fiestas y ceremonias de pedidas del agua o de años de fertilidad, estaban en actividad plena.

En otras comunidades, las familias se organizaban para liberar a sus familiares presos, otras mujeres seguían buscando a sus familiares en las osamentas clandestinas que dejó la guerra en Guatemala. Ya la experiencia de toque de queda y de estado de sitio se conocían en las comunidades, pues fueron mediante estos mecanismos que el Estado logró imponer algunos proyectos mineros.

Estas son condiciones que se deben de tomar en cuenta, pues cuando se dictaron las medidas del confinamiento, todos esos pisos políticos se activaron, se removieron, se actualizaron. Puso en juego los sistemas políticos comunales, con sus estructuras de gobierno comunal y su saber médico. Las comunidades se confinaron, pero no pararon sus actividades de reproducción; sin embargo, se interrumpieron las redes de comercialización.

Llama la atención que el confinamiento y las medidas epidemiológicas pusieran en juego y confrontaran varios sistemas de saberes concretos sobre la salud. Por ejemplo, el presidente de bienes naturales de Totonicapán, quien funge como guardián general del bosque, también se ha formado como naturópata, combinando una serie de memorias médicas de los pueblos. Las autoridades de bosque salieron a dar conferencia de salud sobre plantas que elevan la defensas y medicinas curativas. El presidente del Estado reprimió este tipo de actividades, y llamó a que se acoplaran a las disposiciones del ministerio de salud.

Cuando se iniciaron los decretos de confinamiento, los primeros días fueron muy difíciles de acatar esas disposiciones. Pero en las comunidades el confinamiento fue posible solo porque las autoridades comunales, coordinadas con juntas escolares, juntas de padres y autoridades comunales lograron crear infraestructuras para garantizar el mercado, de tal forma que se promueve el intercambio.

Por eso, en lo que respecta al mercado y al abastecimiento, las comunidades fueron capaces de organizar mercados cantonales; es decir, para desconcentrar en los mercados indígenas, las autoridades indígenas coordinaron para que un mercado se fraccionara en 48 o más. Eso permitió evitar el desabastecimiento y el alza de los precios, pues el último es tendencialmente controlado por las autoridades comunales. En algunos lugares, cuando los productos no pudieron circular, los agricultores comenzaron campañas, algunas veces más organizadas para donar y regalar sus productos a los comunitarios. En varias comunidades, las autoridades comunales forzaron a las autoridades oficiales para que compraran sus productos y esos fueran los que entregaron a los pueblos.

Llama la atención que el confinamiento y las medidas epidemiológicas pusieran en juego y confrontaran varios sistemas de saberes concretos sobre la salud, combinando una serie de memorias médicas de los pueblos.

Las regulaciones estatales han establecido –bajo el criterio de la salubridad– a nivel nacional y nivel municipal que los mercados indígenas y populares eran focos de contagio, así que en varios pueblos se ha prohibido el despliegue de la economía popular. Se han desarrollado varios incidentes donde la policía ha desalojado a mujeres y hombres que organizan sus vidas con economía popular/indígena.

La paralización de la economía indígena/popular, las redes de comercio y las masivas deportaciones de migrantes provenientes de los Estados Unidos ha revelado la fragilidad y la fuerza de estas formas de economía, pues si bien han logrado conservar sus condiciones de vida, éstas se han golpeado de manera sustancial. Aun así, en algunas comunidades del altiplano occidental, al realizar sus cálculos informan que pueden vivir por lo menos siete meses con sus cultivos, a pesar de que sus redes se encuentran interrumpidas. Mientras que en algunos otros espacios se han manifestado algunas mujeres y hombres diciendo que iniciarán a comer dos veces al día, para acostumar el organismo para comer menos debido a la escasez que ya se manifiesta y que se manifestará. En todo caso, lo que se ha presentado es que las maneras de organizar la reproducción de la vida han sido gestionadas con mayor eficacia por las estrategias comunales indígenas, pero al mismo tiempo son éstas las más golpeadas y amenazadas por los desalojos.



Policia Nacional Civil como parte del #PlanControlTerritorial controlan calles y rutas en El Salvador. PH: Jorge E. Cuellar.



Militares y policías controlan el cierre de tiendas y puestos en La Paz (Bolivia). PH: Xinhua.

ARGENTINA

Por Verónica Gago, Alioscia Castronovo, Ana Julia Bustos, Santiago Azzati y Alexandre Roig

El primer caso de covid-19 en Argentina fue registrado el 3 de marzo. El gobierno nacional, asumido en diciembre de 2019, reaccionó con celeridad para la aplicación de un conjunto de medidas tendientes a controlar la circulación del virus y la proliferación de los contagios, en fuerte contraste con las demoras que se vieron en otros países de la región; Chile y Brasil, como ejemplos más contundentes. Se implementaron políticas de emergencia para aumentar la capacidad del sistema sanitario y la compra de insumos críticos. El aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional entró en vigencia el 20 de marzo. Al momento de escribir este informe se empiezan a acelerar los contagios y los fallecimientos. La gran mayoría se concentran en la Ciudad de Buenos Aires y en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en la que vive más de un tercio de la población nacional. Los barrios más afectados fueron, desde el inicio, las villas: es decir, los asentamientos urbanos con mayor hacinamiento y menos servicios públicos; aun cuando las organizaciones villeras reclamaron desde el primer momento la imposibilidad de tener medidas higiénicas básicas por falta de agua.

Al inicio de la pandemia, Argentina ya atravesaba una profunda crisis económica y había comenzado el proceso de renegociación de la deuda pública con los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional, tras el ciclo de endeudamiento externo llevado adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, con cifras récord tanto para la historia del país (hoy equivale al 90% del PBI) como para la historia del propio FMI. En los últimos días, Argentina entró virtualmente en default de pago de la deuda luego de no alcanzarse el acuerdo con los acreedores de los fondos privados de inversión, cuya negociación aún continúa.

La caída del poder adquisitivo, producto de la continua inflación, el aumento de precios de los alimentos y alquileres (dolarizados), y el endeudamiento generalizado son condiciones previas que ya afectaban especialmente a los sectores populares, pero que se aceleraron vertiginosamente a partir de la pandemia. A esto se sumaron despidos y desalojos a pesar de los decretos que los prohíben.

Políticas públicas frente a la pandemia

Junto al aislamiento estricto, las medidas de transferencias de ingresos y garantía de derechos para enfrentar la crisis que el gobierno ha desplegado han sido significativas,

comparadas con otros países de la región, pero insuficientes para afrontar las dimensiones de la crisis. El aumento en las asignaciones familiares, junto con el lanzamiento de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadorxs informales, monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares y cuentapropistas de las categorías más bajas, han sido medidas acertadas pero apenas permiten la supervivencia. Además, hay que señalar las largas demoras en la erogación de las partidas y el cobro de lxs beneficiarixs.

La demanda del ingreso de emergencia cuatriplicó la expectativa estatal: se preveían 3 millones de solicitantes y hubo más de 11 millones. El primer pago del ingreso alcanzó a un total de 8.3 millones de personas que cobraron un importe de entre 120 y 150 dólares y tras el primer pago se definió un segundo desembolso para los primeros días de junio. Más del 80% de las personas migrantes no accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El dato se desprende de la encuesta realizada a la población migrante y refugiada en nuestro país que realizó el espacio Agenda Migrante 2020. El análisis refleja la suma de quienes quedaron excluidxs por residir en la Argentina desde hace menos de dos años (49%), y quienes lograron inscribirse pero no se lo otorgaron (31%)¹. Al mismo tiempo, el gobierno ha promovido una ley para prevenir despidos masivos, junto con un programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que consiste en el pago de parte del salario percibido por lxs trabajadorxs formales, junto a reducciones en las contribuciones patronales. Se han prohibido los desalojos y el corte del suministro de servicios públicos esenciales. Sin embargo, como viene denunciando la Agrupación Inquilinxs Agrupadxs, los desalojos siguen sucediendo, tanto en el mercado inmobiliario formal como informal, acelerándose especialmente por acumulación de deuda².

Desde el comienzo de la pandemia, la saturación por demanda recae sobre la extensa red de comedores y espacios comunitarios en los barrios populares de todo el país, que en cuestión de días tuvieron que adaptar sus precarias instalaciones para cumplir el aislamiento, mientras veían multiplicarse las filas de vecinxs que necesitaban acceder a un plato de comida ante la imposibilidad generar ingresos. Si bien hubo intentos de garantizar el abastecimiento y aumentar la cantidad de raciones por parte del Estado, muchas organizaciones denunciaron la incapacidad gubernamental de responder a tiempo y de garantizar lo necesario.

Economías populares y autogestión

Las estrategias de las economías populares operan sobre un desmantelamiento de larga data de los servicios públicos y de su actual capacidad escasa, lo que se traduce en la construcción

1 <https://www.cels.org.ar/web/2020/04/la-poblacion-migrante-debe-acceder-al-ingreso-familiar-de-emergencia/>

2 <https://www.inquilinosagrupados.com.ar/encuestas/>

de infraestructuras locales, arraigadas y flexibles que se hacen cargo de las cuestiones más vitales. Fundamentales en la pandemia, el rol de las economías populares como estrategias de reproducción social se han evidenciado como economías de la primera línea. Además de ampliar los comedores (en turnos y en raciones), muchas cooperativas y empresas recuperadas por sus trabajadorxs, vinculadas a distintos rubros, pero sobre todo textiles, alimenticias y farmacéuticas, se han volcado a la producción de elementos para abastecer la emergencia sanitaria (barbijos, guantes, jabón, alcohol en gel y otros) y alimentaria, en muchos casos donando solidariamente a la comunidad y a los hospitales.

Las organizaciones sociales que estructuran buena parte de la economía popular fueron también las que produjeron protocolos sanitarios en relación a las necesidades y exigencias propias de los barrios, de las villas, y de sus rutinas comunitarias. En varias ocasiones, las instancias de gobierno copiaron esa invención para poder intervenir. Las promotoras de salud y de género (urbanas y rurales) son también las primeras responsables a la hora de atender las situaciones de emergencia, con jornadas extenuantes y con alto nivel de agobio psicológico frente a la emergencia continua. Colectivas migrantes y de la población lgtbq+ han armado redes de distribución de comida y ropa para distintos barrios e, incluso, para la población en situación de encierro. Organizaciones vinculadas a la agricultura agroecológica han jugado un papel clave en la provisión directa de alimentos en los territorios más urgentes. El socorrismo feminista sigue funcionando como red prioritaria para garantizar abortos y cuidados colectivos. El sindicato de trabajadoras sexuales ha parado desalojos en los hoteles por falta de pago. Se constata así que la urgencia es enfrentada por lxs trabajadorxs más desposeídxs ³.

Trabajos en la primera línea

Bajo la rúbrica de trabajadorxs esenciales, los que son parte del sistema de salud son sin dudas lxs más exigídxs, pero también las trabajadoras de las líneas de emergencia por violencia de género. Con contratos en el Estado en general precarios, sus condiciones y ritmos de trabajo se han vuelto casi insostenibles. Señalizadxs como abnegados y heroicos, sin embargo, han reclamado salarios y derechos.

Pero hay que volver a marcar que la emergencia sanitaria ha sido atendida, además que en hospitales y centros de salud, en primer lugar en los barrios. Allí es donde las organizaciones se encargan –como dijimos– de proveer alimentación ante la restricción de ingresos y la suspensión de los trabajos callejeros (de la feria a la venta ambulante, por nombrar solo dos);

³ Según un informe reciente (abril 2020) del centro CIFRA-CTA, que recoge información del INDEC, del total de trabajadorxs ocupadxs, sólo el 47,7% tiene un contrato laboral registrado. De más del 50% no registrado, el 26% son asalariadxs y otro 26% son trabajadorxs cuentapropistas. Ver en: www.centrocifra.org.ar

de asegurar el cuidado de lxs niños cuyas madres y padres están aislados u hospitalizados; de proveer a lxs ancianxs alimentos y medicamentos; de resolver artesanalmente las situaciones de hacinamiento de vivienda y de organizar el traslado a los centros de salud y la provisión de elementos incluso a su interior (llevando viandas, insumos, etc.).

Por otro lado, les trabajadores de las economías de plataforma son la otra trinchera que remarcar. Muchxs de ellxs migrantes, fueron uno de los pocos sectores que continuaron trabajando durante el aislamiento estricto, sin recibir ningún tipo de protección por parte de sus empleadores. Por último, es abrumador el traslado de las actividades laborales al ámbito doméstico, vía teletrabajo pero también la asunción de las tareas escolares dentro del hogar, que mixtura ya sin distinción las actividades laborales con trabajo de reproducción. El espacio doméstico entra, por varias vías, en colapso: tanto por las violencias de género como por la saturación de tareas laborales y de cuidado, por los límites de clase en el acceso a la conectividad y la acumulación de deudas.

Violencias en los territorios

En este tiempo han existido abusos de las fuerzas de seguridad y otros tipos de violencias, sobre todo en cárceles, en territorios urbanos populares, en contra de pueblos indígenas (Qom) y casos de desaparición y muerte (Luis Espinosa) y muerte en comisarías. Además, lo que lejos de mermar, recrudesció durante el aislamiento fueron las situaciones de violencias hacia mujeres, lesbianas, travestis y trans y los femicidios, travesticidios y transfemicidios.

Las economías populares se visualizan en el centro de los conflictos desatados con la pandemia. Por un lado, han hecho evidente el despojo sistemático de sus territorios, la falta de provisión de servicios que tiene consecuencias de muerte directa en este momento y la injusta remuneración de sus tareas esenciales (en combinación con estructuras tributarias regresivas). Por otro, se han mostrado como las articulaciones más ágiles en los territorios más afectados e, incluso, imprescindibles para la propia intervención del Estado en la emergencia. Queda abierto cuál de estos dos vectores prevalecerá en el despliegue de las economías populares: 1) una intensificación del conflicto y disputa de la riqueza o, 2) un rol de complementariedad con la política social gubernamental. Esto implica también una cierta disputa por la definición de la crisis y de la emergencia en sus múltiples aspectos.

Queda abierto cuál de estos dos vectores prevalecerá en el despliegue de las economías populares: 1) una intensificación del conflicto y disputa de la riqueza o, 2) un rol de complementariedad con la política social gubernamental.



Controles sanitarios en los mercados populares de la ciudad de Guatemala. PH: Prensa Libre.



Producción de insumos para la emergencia sanitaria por parte de las cooperativas textiles de la economía popular argentina. PH: Gastón Bejas.

OTRAS NOTAS DE LA REGIÓN

Además de los países cuyos procesos analizamos anteriormente, nos parece importante señalar algunas situaciones específicas que permiten una mirada más amplia sobre la región, por cuestiones tanto vinculadas a la gravedad de la crisis sanitaria, como a la militarización y a la ofensiva en contra de pueblos indígenas, movimientos sociales y recursos comunes.

Ejemplo de intensificación de la militarización es El Salvador, donde la implementación del Plan de Control Territorial ha permitido al gobierno de Nayib Bukele avanzar en su estrategia de seguridad total y probar técnicas de vigilancia y control social aprovechando de la pandemia⁴.

La militarización es un aspecto clave también de la gestión de la cuarentena en Chile, donde el gobierno de Sebastián Piñera, descreditado tras seis meses de intensas movilizaciones populares que estallaron en todo el país a mediados de octubre del 2019, está intensificando el control y la represión, mientras el número de contagios crece desmedidamente y las protestas sociales por el hambre son reprimidas con violencia. Las redes de organizaciones populares y los entramados asamblearios, tanto en las grandes ciudades como en el campo y en los territorios mapuches, están resistiendo desde abajo creando nuevas dinámicas de mutuo apoyo, solidaridad y cuidado garantizando comida, medicamentos, asistencia sanitaria y psicológica.

Particularmente grave es la situación en Brasil, el segundo país a escala global por casos confirmados de Covid-19, que ya ha superado la cifra de mil muertes diarias, con más de 50.000 personas fallecidas desde el comienzo de la emergencia sanitaria. En medio de una crisis política y económica dramática y de la avanzada del autoritarismo, el presidente Jair Bolsonaro ha asumido una postura negacionista respecto del impacto del virus, de acuerdo a la línea de Trump y otros líderes reaccionarios, oponiéndose a las medidas de cuarentena y distanciamiento social impulsada por muchas institucionalidades locales en Brasil y contribuyendo a generar un conflicto interno y a desatar una durísima crisis sanitaria. Los subsidios sociales han sido particularmente insuficientes⁵, ya que frente a 107 millones de personas demandándolos, solo 59 millones obtuvieron la aprobación. Además, en Brasil una medida básica como el acceso al agua está gravemente comprometida, ya que en 2019, 35 millones de brasileños no tenían acceso al agua tratada⁶; además, como señala Helena

4 <https://revista.drclas.harvard.edu/book/las-dos-pandemias-de-el-salvador-inseguridad-m%C3%A1xima>

5 <https://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos/feminismo-y-organizacion-popular-contras-el-desgobierno-de-bolsonaro>

6 <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/09/25/brasil-tem-48-da-populacao-sem-coleta-de-esgoto-diz-instituto-trata-brasil>

Silvestre⁷, se ha intensificado el uso indiscriminado de agrotóxicos y la lógica que privilegia las ganancias del agronegocio por encima del derecho a la salud y la alimentación saludable de la población. Como ha denunciado el antropólogo Eduardo Viveiros De Castro⁸, la pandemia, adelanto y efecto de la crisis climática, es aprovechada por el gobierno para avanzar con sus planes de apropiación del territorio, de explotación y de genocidio hacia los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes y los sectores populares.

En Bolivia, el gobierno de facto de Jeanine Añez, tras el golpe de noviembre del año pasado, sigue en el poder y aprovechó de la pandemia para endurecer las medidas represivas, la militarización del territorio, la persecución hacia la oposición y lxs periodistas. Además, estuvo postergando aun mas las elecciones, que se realizarán el 6 de septiembre. Un aspecto central de la compleja situación boliviana está vinculado a las medidas de cierre de fronteras, que dejaron a miles de migrantes en países limítrofes, donde viven o trabajan en muchos casos de forma temporaria, sin poder volver a sus comunidades, generando una gravísima situación sanitaria y humanitaria en las fronteras. Estamos hablando de miles de trabajadorxs estacionales que por temporadas trabajan en territorio chileno y argentino: organizaciones, colectivos feministas y migrantes denunciaron esta situación lanzando campañas políticas para pedir la regularización y a la vez la posibilidad para que lxs migrantes temporarios puedan volver a su casa. Gracias a la visibilización por estas campañas se lograron mejores condiciones sanitarias y se obtuvo la posibilidad para muchxs de volver a sus comunidades. Grave es también la situación de los pueblos indígenas, ya que existen 77 casos positivos entre los pueblos yuqui, guarayo, yuracaré, cayubaba y charagua iyambae y que, tal como en otros países de la región, algunos pueblos enfrentan el riesgo de extinción. En Bolivia la tasa de informalidad alcanza el 80 por ciento, por lo tanto las economías populares y de sus tramas socio-económicas representan una dinámica clave en relación a los modos de organizar y reproducir la vida, garantizar circulación de recursos y riquezas. En este sentido, es preocupante la situación de miles de trabajadores en los centros urbanos como en el campo: la economía popular está enfrentando una crisis en el ámbito de los comercios en los mercados (productos agrícolas, alimentos), al igual que los sectores textiles, mientras el mundo dinámico y heterogéneo de lxs feriantes de El Alto y La Paz, donde se vende desde la electrónica a la indumentaria, registra una baja dramática de sus ventas. Por estas razones, sin respaldo de políticas públicas a nivel socio-económico para sostener la cuarentena, miles de trabajadorxs se exponen a salir sin seguridad ni garantías de protección sanitaria, por estar enfrentando el hambre, mientras la situación en el país sigue empeorando.

7 <https://www.revistaamazonas.com/2020/03/15/coronavirus-reflexoes-sobre-uma-sociedade-que-produz-doencas-e-morte/>

8 <https://oplas.org/sitio/2020/05/20/eduardo-viveiros-de-castro-lo-que-esta-pasando-en-brasil-es-un-genocidio/>